

REPUBLICA DE COLOMBIA
TRIBUNAL SUPERIOR DE MEDELLIN



SALA LABORAL

Acta N° 178

Proyecto discutido y aprobado en sala virtual

Medellín, veinticuatro (24) de junio de dos mil veintidós (2022)

En la fecha, el Tribunal Superior de Medellín, Sala Segunda de Decisión Laboral, se reunió para emitir sentencia de segunda instancia en la que se resuelve los recursos interpuestos y el grado jurisdiccional de consulta en favor de Colpensiones, en el proceso ordinario laboral promovido por la señora **AIDA DEL CARMEN AMAYA MIRANDA** contra **PROTECCIÓN S.A., PORVENIR S.A. y COLPENSIONES**.

De acuerdo a lo dispuesto en el art. 13 de la ley 2213 del 13 de junio de 2022, la presente decisión se profiere mediante sentencia escrita.

ANTECEDENTES

Pretensiones

La demandante solicita que se declare la ineficacia de su vinculación al RAIS; y, en consecuencia, se condene **Protección S.A. y a Porvenir S.A.**, a trasladar a **Colpensiones**, el valor de la cuenta de ahorro individual, incluyendo las comisiones de administración y los rendimientos causados; y a **Colpensiones** a tenerlo como su afiliado sin solución de continuidad.

Hechos

La actora fue afiliada al **ISS** hoy **Colpensiones** desde el **08 de julio de 1992**, se trasladó al RAIS administrado por **Protección S.A.** el día **28 de octubre de 1997** y a **Porvenir S.A.**, el **30 de marzo de 2006**.

Antes de su vinculación al régimen privado de pensiones no se le brindó una información personalizada en la que se le informará acerca de las consecuencias del traslado de régimen.

Contestación Protección S.A.

Esta administradora de pensiones a través de apoderada, manifestó que es cierto que la demandante se vinculó a esa entidad, luego de que se le brindara una asesoría amplia, correcta, clara, comprensible y suficiente sobre todos los aspectos del RAIS.

Se opuso a la prosperidad de las pretensiones y propuso como excepciones: Inexistencia de la obligación, buena fe, prescripción, aprovechamiento indebido de recursos públicos.

Contestación Colpensiones

La administradora pública de pensiones a través de apoderado manifestó que es cierto que la actora fue su afiliada y se trasladó al RAIS, sin que le consten los pormenores de su selección. Se opuso a la prosperidad de las pretensiones y propuso como excepciones: Inexistencia de la obligación, prescripción, buena fe, sostenibilidad financiera del sistema y presunción de legalidad de los actos administrativos.

Respuesta de Porvenir S.A.

Entidad que manifestó que en general no le constan los hechos de la demanda, sin embargo, para el momento del traslado a la actora sí se le brindó toda la información necesaria y suficiente, siendo su decisión libre y voluntaria. Se opuso a las pretensiones y propuso como excepciones: Prescripción, buena fe, inexistencia de la obligación.

Sentencia de Primera Instancia

El Juez Once Laboral del Circuito de Medellín, en sentencia del **25 de junio de 2021**, declaró la ineficacia del traslado al RAIS, ordenando a **Protección S.A. y Porvenir S.A.**, trasladar a **Colpensiones**, los aportes realizados, cotizaciones, sumas para la aseguradora, gastos de administración, frutos e intereses y los porcentajes descontados para el Fondo de Garantía de la Pensión Mínima.

Finalmente, ordenó a **Colpensiones** recibir estos valores y homologarlos como semanas cotizadas teniendo al actor como su afiliado para efectos pensionales.

Esta decisión no fue compartida por **Protección S.A., Porvenir S.A.**, y Colpensiones, motivo por cual la impugnó en los siguientes términos:

Apoderada Protección S.A.

La recurrente solicita que se **revoque** parcialmente la decisión de primera instancia, en cuanto condenó a la devolución de gastos administración y primas de reaseguros, en razón a que este descuento se encuentra autorizada por el artículo 20 de la Ley 100 de 1993 y se causaron producto de la buena gestión de la entidad, autorizada en ambos regímenes.

En lo referente a la devolución de las primas de seguros previsionales expresa que estas ya fueron pagadas a terceros de buena fe que protegieron frente a los riesgos de invalidez y muerte al afiliado durante el tiempo que estuvo vigente su vinculación.

Si el efecto de la ineficacia es que las cosas vuelvan al estado en que se encontraban debe decirse que entonces nunca se administró la cuenta y no hubo unos rendimientos, debiendo permitirse que la entidad conserve las cuotas de administración.

Recurso Porvenir S.A.

Manifiesta que la actora no probó que la entidad no le haya dado la debida información y que el formulario fue firmado de manera libre y voluntaria, son documentos que se presumen aumentos, dejando demostrado que al momento de la vinculación sí se le brindó toda la información que se exigía para el momento.

Es tanto su deseo de permanecer en el RAIS que realizó traslado entre administradora del mismo régimen, es decir, era una persona capaz y por tanto son actos jurídicos válidos.

En cuanto la condena a la devolución de gastos administración y primas de reaseguros, solicita se revoquen en razón a que este descuento se encuentra autorizada por el artículo 20 de la Ley 100 de 1993 y se causaron producto de la buena gestión de la entidad, autorizada en ambos regímenes.

Finalmente, indica que se debió declarar la prescripción de los gastos de administración, toda vez que lo pagado por estos dineros se afecta por el paso del tiempo en los términos de los artículos 488 del CST y 151 del CPT y SS.

Recurso Colpensiones

Considera la apoderada de la entidad pública que debe ser porvenir quien en un futuro proceda a reconocer la prestación, porque de lo contrario sería atentar contra el patrimonio público

Colpensiones es un tercero ajeno al traslado quien no se puede ver afectada por aquel.

Alegatos de conclusión

Corrido el término de traslado consagrado en el artículo 15 del Decreto 806 de 2020, la apoderada de **Colpensiones** presentó alegatos en los que manifestó.

La sentencia proferida por el a quo, respecto a la obligación de Colpensiones de recibir a los afiliados que judicialmente deben trasladarse al RPM sin consideración de las implicaciones económicas y administrativas que estas providencias representan y al tener que asumir una defensa técnica en una relación jurídica sustancial de la cual en principio no hizo parte, es decir, la forma en que se vincula a Colpensiones en los procesos judiciales como litisconsortes necesarios, partiendo de la base que esta Administradora no participó en la celebración del contrato de vinculación, ni hizo parte del uso de maniobras contrarias a la ley para obtener el traslado de los aportes de los afiliados con ocasión de la entrada en vigencia de la ley 100 de 1993.

La voluntad de la parte actora de poder emigrar de un régimen a otro, fue un derecho que ejerció al momento de la afiliación al régimen de ahorro individual con solidaridad, hecho ajeno a Colpensiones y contemplado en el artículo 2 de la ley 797 de 2003 la cual modificó el artículo 13 de la ley 100 de 1993, en su literal e.

Restricción que tiene razón por que en la administradora Colombiana de Pensiones no se ha establecido un total de capital para el debido reconocimiento y pago de una pensión en el futuro. Ahora bien, la parte actora argumenta que la afiliación al fondo privado se produjo como consecuencia de la existencia de vicios en el consentimiento, ausencia de consentimiento informado, el abuso de la posición contractual, y la manipulación de la información, e indican, que, de haber sido el afiliado suficientemente informado sobre las ventajas y desventajas de cada régimen, no habría aceptado el traslado. Lo anterior significa que Colpensiones como un tercero no puede inferir en los convenios estipulados entre las partes que celebraron el contrato de afiliación, a un más, no es la entidad encargada de dirimir si el traslado fue eficaz o no. Su razón de ser radica en el derecho de la libertad contractual que las partes tienen, que se fundamenta en que, por voluntad libre, los sujetos contractuales se obligan. La misma disposición legal establece que la autonomía de las personas que intervienen en el contrato puede ser limitada por causas legales o por propia voluntad. Ahora bien, el contrato de afiliación y/o traslado, una vez perfeccionado, son ley para las partes y no pueden ser modificados sino con su voluntad o por razones que determine el legislador, o en este caso en particular la declaratoria de NULIDAD y/o INEFICACIA de

ese traslado por parte de un juez competente. Este mandato se traduce, en que los contratos no crean retribuciones u obligaciones a favor o a cargo de personas diferentes de quienes asistieron a su creación o que no lesionan ni benefician a terceros; en este caso Colpensiones.

Se ha evidenciado que, en los fallos relacionados con la nulidad o ineficacia de traslado entre regímenes pensionales, que se censura a la administradora del Régimen de Ahorro Individual con Solidaridad – RAIS, por no proporcionar al afiliado una suficiente, completa, clara, comprensible y oportuna información sobre las implicaciones del traslado, desconociendo que el deber de información que tienen las administradoras de pensiones, ha tenido varias etapas a saber

Por lo cual, si dicha información no fue proporcionada por las AFP PROTECCIÓN y PORVENIR, omitiendo la información de forma parcial o total, serian estas las directamente implicadas en el reconocimiento de la prestación económica en el futuro de la demandante, señora AIDA DEL CARMEN AMAYA MIRANDA y no Colpensiones como se viene reiterando en los diferentes fallos judiciales.

Por consiguiente, el artículo 48 de la Constitución Política, estableció dos dimensiones de la seguridad social; por un lado, la concibió como un derecho constitucional fundamental; y, por el otro, como un servicio público de carácter obligatorio el cual se debe prestar bajo la dirección, coordinación y control del Estado, en aras a la materialización de los principios de eficiencia, universalidad y solidaridad, entre otros. En consecuencia, la declaración injustificada de ineficacia del traslado de un afiliado del RPM a RAIS afecta la sostenibilidad financiera del Sistema General de Pensiones, y pone en peligro el derecho fundamental a la seguridad social de los demás afiliados.

Empero, en estos casos, la condena a COLPENSIONES a recibir el valor de los aportes realizados a la AFP del RAIS y reactivar la afiliación de la demandante, es solo la consecuencia lógica de la orden previamente impartida en este proceso, en el sentido de declarar la ineficacia de esa afiliación a las AFP del RAIS de manera que bien puede decirse que, sin ésta orden, aquella condena no se hubiera producido. Dicho de otro modo, era inexigible otra conducta para COLPENSIONES antes de que la presente declaratoria de ineficacia del traslado se hubiere proferido, pues esta entidad no es autoridad judicial como para resolver, antes del proceso, la reclamación de la demandante. Por los argumentos expuestos solicito que sea revocada la sentencia de primera instancia y en su lugar sea absuelta mi representada de todas las pretensiones incoadas en su contra y su situación pensional sea resulta bajo el RAIS. Empero, si la decisión de la sala es confirmar la sentencia de primera instancia, solicito respetuosamente que las AFP PROTECCION y

PORVENIR devuelvan a Colpensiones los valores que hubiere recibido con motivo de la afiliación de la parte actora, como cotizaciones, bonos pensionales, sumas adicionales de la aseguradora, con todos sus frutos e intereses como los dispone el artículo 1746 del Código Civil, esto es, con los rendimientos que se hubieren causado y como lo estableció en su momento las sentencias 68838 de mayo 8 de 2019, que remite a las sentencias SL 31989 - 2008; SL 4964 de 2018, SL 4989 de 2018 y SL 1421 de 2019, de forma indexada, toda vez que, durante este tiempo se privó de las mismas a mi representada de dichos dineros como se sustentó en la sentencia SL 1689 de 2019 MP CLARA CECILIA DUEÑAS QUEVEDO.

Problema Jurídico

Los problemas jurídicos a resolver en esta instancia de conformidad con los recursos interpuestos y el grado jurisdiccional de consulta en favor de **Colpensiones**, serán: (i) Determinar si el acto jurídico que generó el traslado de régimen de la demandante al RAIS resulta o no eficaz, (ii) Establecer que conceptos está obligada a devolver **Protección S.A. y Porvenir S.A.**, a **Colpensiones** y (iii) Revisar si operó la prescripción.

CONSIDERACIONES

Antes de resolver considera la Sala importante realizar las siguientes precisiones de conformidad con las pruebas obrantes en el expediente:

1. La señora **Aida Del Carmen Amaya Miranda** fue afiliada al ISS hoy **Colpensiones** el **08 de julio de 1992**.
2. La actora se trasladó al RAIS administrado por **Protección S.A.**, el **28 de octubre de 1997**.
3. **Porvenir S.A.** afiliación desde el **30 de marzo de 2006** a la actualidad.

Efectuadas las anteriores anotaciones procederá la Sala a resolver los problemas jurídicos puestos en su conocimiento.

El precedente jurisprudencial en materia de traslado de régimen pensional.

La Sala Laboral de la Corte Suprema de Justicia ha elaborado un nutrido precedente en materia de la obligación de información de los fondos de pensiones, siendo sus sentencias fundantes la 31314 y 31989 del 9 de septiembre de 2008, a las que ha seguido una copiosa producción al resolver recursos de casación en las sentencias SL1688 de 2019, SL4360 de 2019, SL4426 de 2019, SL2611 de 2020, SL2877 de 2020, SL-1217 de 2021 y SL782 de 2021.

En las providencias citadas el Alto Tribunal fijó unos grados de exigencia de la información, dependiendo de las normas vigentes para la fecha en que se efectúe el vínculo a las administradoras de pensiones, estableciendo en lo temporal los siguientes momentos: (i) desde la fundación de las AFP, segundo momento, (ii) desde la expedición de la Ley 1328 de 2009 y el Decreto 2241 de 2010 y (iii) a partir de la vigencia de la Ley 1748 de 2014 y el Decreto 2071 de 2015.

En el caso sometido a estudio, el traslado al RAIS a través de **Protección S.A.** se hizo efectivo el día **28 de octubre de 1997**, lo que se corresponde con el primer momento, ciclo para el cual la jurisprudencia en interpretación del artículo 97 del Decreto 663 de 1993 ha exigido la demostración por parte de las administradoras de pensiones del cumplimiento del deber entregar una información necesaria y transparente, conceptos que se explican en la sentencia SL-1452-2019 de la siguiente forma:

Información necesaria: consistente en la descripción de las características, condiciones, acceso y servicios de cada uno de los regímenes pensionales, de modo que el afiliado pueda conocer con exactitud la lógica de los sistemas públicos y privados de pensiones, lo que implica un comparativo entre las vigentes, así como de las consecuencias jurídicas del traslado.

Transparencia: La AFP a través de su promotor debe comunicar a su potencial afiliado en un lenguaje claro, simple y comprensible, los elementos definitorios y condiciones del régimen de ahorro individual con solidaridad y del de prima media con prestación definida, de manera que la elección pueda realizarse por el afiliado después de comprender a plenitud las reglas, consecuencias y riesgos de cada uno de los oferentes de servicios.

El anterior deber trae en lo procesal una carga que recae en la administradora de pensiones, y es demostrar que suministró al posible afiliado una información calificada, en la que se expliquen los beneficios y desventajas del cambio de régimen, para solo a partir de este conocimiento concluir que se garantizó su derecho al ejercicio de una libre selección de régimen pensional. Sobre la **carga de la prueba** es importante la remisión a la sentencia SL4426-2019, donde la Corte expone los motivos por los cuales las administradoras deben demostrar que suministraron una información clara y transparente, lo que se explica desde la premisa que el afiliado presenta una afirmación indeterminada -la de que no recibió información- y es el fondo a quien corresponde demostrar que cumplió con sus deberes en esa materia, aspecto en el que por demás está en una mejor posición de ilustrar por cuanto debe conservar en sus archivos la documentación que soporta el traslado.

En lo que respecta al caso de autos, **Protección S.A.** al contestar la demanda, indicó que antes de efectuarse la suscripción del formulario de traslado, le suministró al actor una asesoría amplia, correcta, clara, comprensible y suficiente sobre todos los aspectos del RAIS, sin embargo, consultado el expediente no se advierte prueba alguna que permita establecer que existió una información cualificada al momento de la vinculación.

Sobre las obligaciones que recaen en las administradoras de pensiones es bastante ilustrativa la sentencia SL-782 de 2021, donde la Corte Suprema de Justicia indicó que según su línea jurisprudencial se debe declarar la ineficacia cuando quiera que:

...i) la insuficiencia de la información genere lesiones injustificadas en el derecho pensional del afiliado, impidiéndole su acceso al derecho; ii) no será suficiente la simple suscripción del formulario, sino el cotejo con la información brindada, la cual debe corresponder a la realidad; iii) en los términos del artículo 1604 del Código Civil, corresponde a las Administradoras de Fondo de Pensiones allegar prueba sobre los datos proporcionados a los afiliados, los cuales, de no ser ciertos, tendrán además las sanciones pecuniarias del artículo 271 de Ley 100 de 1993, y en los que debe constar los aspectos positivos y negativos de la vinculación y la incidencia en el derecho pensional.

Dejando claro que no le asiste razón a **Porvenir S.A.**, en cuanto que el formulario se firmó de manera libre y voluntaria, toda vez que ha sido clara la jurisprudencia en señalar que la firma del formulario únicamente da cuenta de la vinculación del afiliado, pero jamás de una debida información.

A partir de lo anterior, encuentra la Sala que no demostró **Protección S.A.** que cumpliera con su deber de información, por la consecuencia es que la afiliación efectuada a este fondo devenga ineficaz de conformidad con lo establecido en el artículo 271 de la Ley 100 de 1993, y en ese sentido se **Confirmará** la decisión de primera instancia.

De los efectos de la ineficacia

El Juez de primera instancia **condenó a Protección S.A. y Porvenir S.A.**, a trasladar a **Colpensiones** los gastos de administración, las primas de reaseguramiento y garantía de pensión mínima, orden a la que se oponen las apoderadas de los fondos privados, bajo los siguientes argumentos: i) los dineros cobrados por estos conceptos tuvieron como fundamento el artículo 20 de la Ley 100 de 1993 y se descontaron por una efectiva gestión y ii) los sumas descontadas ya fueron trasladadas a terceros de buena fe que cubrieron las contingencias.

En ese orden, en lo que refiere al punto i), para la Sala es claro que durante el periodo en que el actor estuvo vinculado al RAIS, se privó a **Colpensiones** del cobro de los gastos de administración en su favor, y en ese orden el restablecimiento de las cosas a su estado inicial no puede perjudicar al fondo de naturaleza pública, por lo que precisamente con fundamento en el artículo 20 de la Ley 100 de 1993, esta entidad tiene derecho a recibir 3 puntos porcentuales del aporte por gastos de administración, concepto del que se le privó de recibir como consecuencia del acto declarado ineficaz.

Ahora, en lo que refiere a lo pagado por ii) seguros previsionales por parte de la AFP del RAIS, debe indicarse que de autorizarse descuento alguno por este concepto se estaría disminuyendo el valor del porcentaje de debió corresponder a **Colpensiones**, desmejora que deben asumir los fondos de pensiones demandados con cargo a su propio patrimonio.

Así las cosas, quedan resueltos los recursos presentado por la apoderada recurrente, indicando que se desestima su petición, sin embargo, siendo este un aspecto conocido en el grado de consulta es necesario dejar algunos aspectos claros en lo referente a los conceptos que deben ser devueltos por las AFP del RAIS cuando se declara la ineficacia y en ese sentido esta Sala a partir del precedente jurisprudencial a identificado los siguientes conceptos:

1. **Capital ahorrado:** Este concepto constituye el sustento financiero del pago de la prestación y conforme con lo dispuesto en el literal b) del artículo 113 de la Ley 100 de 1993 debe ser trasladado cuando exista movilidad del RAIS al RPM¹.
2. **Rendimientos:** En igual sentido que el concepto anterior, soportan el pago de la pensión y se trasladan conforme a lo enseñado por el canon 113 ídem, destacando con respecto a estos como lo enseñara la Corte desde la sentencia 31989 de 2008, que su devolución se sustenta en que el mayor valor de la cosa aprovecha al vendedor cuando la restitución se debe al incumplimiento del comprador².
3. Los **gastos de administración**³, concepto consagrado en el artículo 20 de la Ley 100 de 1993 y cuyo valor corresponde a 3 puntos de la cotización obrero patronal efectuada, la cual se destina al pago de

¹Se debe realizar su devolución conforme lo enseñado en las sentencias CSJ SL 31989, 9 sep. 2008, CSJ SL4964-2018, CSJ SL4989-2018, CSJ SL1421-2019, CSJ SL1688-2019, CSJ SL1689-2019 y CSJ SL4360-2019.

²Se debe realizar su devolución conforme lo enseñado en las sentencias CSJ SL 31989, 9 sep. 2008, CSJ SL4964-2018, CSJ SL4989-2018, CSJ SL1421-2019, CSJ SL1688-2019, CSJ SL1689-2019 y CSJ SL4360-2019.

³ Se debe realizar la devolución de estos conceptos indexados conforme lo enseñado en las sentencias CSJ SL-3871-2021, CSJ SL-4062-2021 y CSJ 4063-2021.

seguros previsionales de invalidez y sobrevivientes, primas de seguros del Fogafín y los pagos correspondientes a la AFP por su gestión.

En lo referente al traslado de estos conceptos por parte de las administradoras del RAIS a **Colpensiones**, la jurisprudencia de la Sala Laboral de la Corte Suprema de Justicia ha encontrado 2 razones fundamentales para soportar esta orden: (i) la declaración de ineficacia implica que las administradoras del RAIS nunca debieron recibir estos beneficios⁴, (ii) la devolución debe ser plena y con efectos retroactivos, porque estos recursos serán utilizados para la financiación de una pensión, aspecto que busca mantener el principio de sostenibilidad financiera del sistema de pensiones⁵.

Finalmente, en este aspecto se recuerda la necesidad que estos conceptos sean asumidos por la administradora con cargo a su propio patrimonio y debidamente indexados⁶.

4. **Los aportes al fondo de garantía de pensión mínima:** el pago de estos aportes propio del RAIS y consagrado en el artículo 20 de la Ley 100 de 1993 no encuentra un equivalente en el RPM, motivo por el cual esta Sala ha sostenido que al declararse la ineficacia los dineros aportados por el afiliado a este fondo deben ser devueltos al RPM bajo los lineamientos del artículo 7 del Decreto 3995 de 2008 compilado en el DUR 1833 de 2016⁷.

A partir de lo anterior, encuentra la Sala que le asistió razón al juez de primera instancia al ordenar la devolución de todos los conceptos que las administradoras privadas recibieron con motivo de la afiliación de la actora, siendo la única finalidad de esta orden la de mantener la sostenibilidad financiera del sistema, pues lo que se busca es que el fondo público reciba de forma íntegra aquellos valores que debieron ingresar a su administración y que por la afiliación declarada ineficaz dejó de percibir y en tal sentido se **Confirmará** la decisión de primera instancia, **Adicionándola** para indicar que los gastos de administración deben trasladarse por las entidades debidamente indexadas.

⁴ Sentencia SL-4360-2019.

⁵ Sentencia SL-2877-2020.

⁶ En este sentido se pueden leer las sentencias CSJ SL1688-2019, CSJ SL1689-2019, CSJ SL 782-2021, CSJ SL 1187-2021 y CSJ SL 1197-2021.

⁷ Respecto de este particular se puede consultar la sentencia SL 2877-2020, providencia en la cual la Corte Suprema de Justicia encontró procedente la devolución de los aportes al fondo de garantía de pensión mínima, máxime cuando estos recursos los manejan las administradoras de pensiones privadas en una subcuenta separada con el fin de financiar aquel las prestaciones.

En lo relacionado al recurso de Colpensiones, respecto de que a futuro quien debe reconocer las prestaciones es el fondo privado, vale señalar que no le asiste razón al apoderado, toda vez que precisamente tras la declaratoria de ineficacia el efecto es que las cosas vuelvan al estado en que se encontraban, que no es otra cosa que en el RPM como si nunca se hubieran trasladado y por ello es que se ordena la devolver todos los conceptos que dejó de administrar la administradora pública, siendo la llamada a reconocer las prestaciones posteriores, quien por demás no es víctima de ninguna pérdida.

De la excepción de prescripción

En lo que tiene que ver con la prescripción, encuentra la Sala que esta excepción no está llamada a prosperar, puesto que, la ineficacia es el resultado del incumplimiento de un elemento estructural del negocio, por lo que, al no haber producido efectos, el solo transcurso del tiempo no tiene la virtualidad de integrar los elementos omitidos. En este sentido se remite a la lectura de las sentencias SL-1688 de 2019, SL-373 de 2021 y SL-4062 de 2021.

Por último, la apoderada **Porvenir S.A.** indica en su recurso, que, los conceptos comprendidos dentro de los gastos de administración se afectan por el paso del tiempo y en ese sentido no es posible ordenar su traslado, pues han transcurrido más de 3 años desde su pago por parte del afiliado.

Con respecto a esta manifestación debe indicarse que por tratarse de sumas que están llamadas a integrar el capital indispensable para la consolidación y financiación de la prestación y, en consecuencia, ligados de manera indisoluble con el estatus de pensionado, no pueden estar sometidos a prescripción, tal y como lo enseñara la Sala Laboral de la Corte Suprema en la sentencia SL-1473 de 2021.

Costas

Costas en esta instancia a cargo de **Protección S.A. y Porvenir S.A.**, por ser desfavorable el recurso interpuesto de conformidad con lo establecido en el numeral 1) del artículo 365 del CGP. Las agencias en favor del demandante se fijan en **\$1.000.000**, a cargo de cada administradora.

Decisión

En mérito de lo expuesto, la Sala Segunda de Decisión Laboral del Tribunal Superior de Medellín, administrando justicia en nombre de la República de Colombia y por autoridad de la ley,

RESUELVE

CONFIRMAR la providencia de primera instancia proferida por el Juez Once Laboral del Circuito de Medellín, el día **25 de junio de 2021**, en el proceso ordinario laboral adelantado por la señora **AIDA DEL CARMEN AMAYA MIRANDA** contra **PROTECCIÓN S.A., PORVENIR S.A. y COLPENSIONES. ADICIONÁNDOLA** para indicar que los gastos de administración deben trasladarse por las entidades debidamente indexadas.

Costas en esta instancia a cargo de **Protección S.A. y Porvenir S.A.**, por ser desfavorable el recurso interpuesto de conformidad con lo establecido en el numeral 1) del artículo 365 del CGP. Las agencias en favor del demandante se fijan en **\$1.000.000**, a cargo de cada administradora.

La anterior decisión se notifica por **EDICTO**.

LOS MAGISTRADOS



CARMEN HELENA CASTAÑO CARDONA



HUGO ALEXANDER BEDOYA DIA



GUILLERMO CARDONA MARTÍNEZ



SECRETARÍA SALA LABORAL

EDICTO VIRTUAL

La secretaría de la Sala laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Medellín notifica a las partes la sentencia que a continuación se relaciona:

Proceso	Ordinario
Demandante	Aida Del Carmen Amaya Miranda.
Demandado (s)	Colpensiones y otros
Radicado	05001-31-05-011-2019-00469-01
Decisión	Confirma y adiciona sentencia
Magistrado ponente	Carmen Helena Castaño Cardona

El presente edicto se fija en la página web institucional de la Rama Judicial <https://www.ramajudicial.gov.co/web/tribunal-superior-de-medellin-sala-laboral/131> por el término de un (01) día hábil. La notificación se entenderá surtida al vencimiento del término de fijación del edicto.

CONSTANCIA DE FIJACIÓN

Fijado el 28 de junio de 2022 a las 8:00am

CONSTANCIA DE DESFIJACIÓN

Se desfija el 28 de junio de 2022 a las 5:00pm


RUBÉN DARÍO LÓPEZ BURGOS
SECRETARIO